



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés

S18-143

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación sentencia
Demandante:	JOSE NORVEY RAMÍREZ HERRERA
Demandado:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Radicado No.:	05001-31-05-004-2016-00389-01
Tema:	reintegro – interpretación cláusula convencional
Decisión:	CONFIRMA ABSOLUCIÓN

LINK: [18-143 \(004-2016-00389\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación formulado por la parte actora en el proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 15** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita el demandante que tras declararse que al momento de la terminación del vínculo, era beneficiario de la convención colectiva que contenía una cláusula de estabilidad, se ordene al Departamento de Antioquia **REINTEGRARLO** a su puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones, con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales, legales y convencionales, causadas durante su desvinculación. Además de la indexación de las condenas y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que desde el 15 de agosto de 1989 hasta el 29 de junio de 2010 laboró como trabajador oficial en el cargo de obrero adscrito a la Secretaría de Infraestructura.
- ✓ Que sus funciones estaban relacionadas con el sostenimiento y construcción de obra pública.
- ✓ Que mediante Decreto 2105 de 2004, la demandada creó unas novedades en la planta de cargos de la administración departamental, suprimiendo de forma específica los cargos de los trabajadores oficiales a la secretaria antes aludida.
- ✓ Que a través del Decreto 2109 de 2004 la entidad decidió no prorrogar su contrato de trabajo, además de los de otros compañeros.
- ✓ Que el Departamento obtuvo autorización judicial para el despido, en virtud de un proceso de levantamiento de fuero sindical.
- ✓ Que para el momento de la terminación del contrato fungía como miembro del SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE ANTIOQUIA – SINTRADEPARTAMENTO, y parte de la junta directiva en calidad de vocal 2 (por un período de dos años), sindicato al cual estaba afiliado desde el 27 de octubre de 2004.
- ✓ Que se omitió dar cumplimiento a la convención colectiva en su artículo 91 denominado *gestiones de reubicación*, pese a que radicó múltiples solicitudes, resueltas desfavorablemente en una época en que la planta global de cargos de la Gobernación de Antioquia requería personal con especificaciones como las de él, tanto así que desde el 1 de agosto de 2005 había contratado más de 10 ingenieros civiles, además de que contaba con varias vacantes en el cargo de obrero, cuya asignación le fue negada.
- ✓ Que varios de los cargos, en principio, fueron declarados suprimidos, pero posteriormente reubicados en cargos similares o iguales, tal y como se evidencia en la Resolución nro. 1358 de 2005 *por medio de la cual se crean una novedades en la planta de cargos de la administración departamental*.
- ✓ Que el 28 de junio de 2013 presentó reclamación administrativa solicitando su reintegro, obteniendo respuesta el 17 de julio del mismo año.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que eran ciertos los relacionados con la existencia del contrato laboral, así como sus extremos temporales, las funciones desempeñadas, el contenido de los decretos aludidos, la

vinculación del demandante al sindicato, el cargo ocupado en el mismo, además del permiso que obtuvo el 9 de febrero de 2010 del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín para cancelar dicho contrato con la correspondiente indemnización que ello implicaba (\$51.015.311), decisión confirmada por el *ad quem* el 14 de mayo del mismo año, razón por la cual mediante Decreto 1442 de 2010, la Dirección de Personal materializó la decisión, acto administrativo notificado personalmente el 29 de junio de 2010. Aclara que la norma invocada NO resulta aplicable al caso pues el departamento sólo está obligado a realizar gestiones de reubicación únicamente cuando al aplicar disposiciones sobre descentralización administrativa desaparecen una unidad de una dependencia, situación disímil al caso, ya que la modificación de la estructura de la secretaría a la que estaba adscrito el demandante obedeció a razones de orden técnico y económico, soportadas en el estudio que realizó con el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública). Explica que la descentralización administrativa supone el traslado de competencias de la administración central, a nuevas personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio, lo cual tampoco se presentó al reorganizar la Secretaría de Infraestructura.

Igualmente señaló que 17 de julio de 2013 dio respuesta al derecho de petición elevado por el demandante, y como era reiterativo, simplemente se remitió a lo ya indicado respecto de no acceder a la solicitud de reintegro. De otro lado precisa, que a través del Decreto 1358 de 2005 creó empleos para trabajador oficial en la modalidad de chofer, oficios varios, coter, ayudante y auxiliar, NO así de obrero o uno similar, que era el solicitado por el actor.

Finalmente añade que el señor José Norvey, tras ser indemnizado, inició proceso especial de fuero sindical para ser reintegrado, emitiéndose sentencia negativa a sus intereses, tanto en primera como en segunda instancia.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 26 de junio de 2018, el Juzgado Cuarto del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ al Departamento de Antioquia de la pretensión de reintegro formulada en su contra por el actor, a quien condenó en costas fijando como agencias en derecho la suma de un SMLMV.

Dentro del término concedido por la ley, la parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ AL DECIDIR

Que claramente, al momento de desvinculación, el demandante era beneficiario de la convención colectiva, punto que no comportó objeto de controversia, cosa diferente era establecer si se beneficiaba de la estabilidad laboral que el texto convencional contemplaba en el art. 91, aspecto en el que difería de la postura del trabajador, al señalar que la cláusula regía en aquellos eventos en que la supresión del cargo fuera con ocasión de una descentralización administrativa, sin que pudiese ser de acogida la versión de los testigos según los cuales se aplicaba frente a disímiles eventos (desmembración, fusión, transformación). En tal sentido, el sentido gramatical de la norma era claro, y no tenían cabida los actos de restructuración establecidos por el departamento en virtud de los cuales suprimió el cargo que ejercía el demandante en la secretaria de infraestructura técnica, pues precisamente se cimentó en una causa diferente a la aludida descentralización, de ahí que el empleador no tenía la obligación de realizar gestiones para su reubicación. Si la norma no ofrecía duda, no le correspondía como juzgador buscar otro tipo de interpretaciones con base en el principio de favorabilidad o *indubio pro operario*. Igualmente aduce que las reubicaciones que efectuó la administración, eran casos especiales, presentados en otras secretarías disímiles a la que estuvo adscrito el actor.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN PARTE ACTORA

Considera que, en efecto, la situación fáctica no estaba en discusión, sino que, en palabras del fallador, el tema álgido se circunscribía a la interpretación de la convención colectiva. Precisa que realmente los llamados a fijar el alcance de un convenio colectivo en efecto eran las partes, empero, la interpretación no necesariamente tenía que constar en un acta o debía formalizarse, la práctica cotidiana también podía establecer cuál era ese verdadero alcance, esa realidad. El Departamento considera que ese art. 91, única y exclusivamente, resultaba aplicable a los procesos de descentralización administrativa, tesis que compartió el despacho, sin embargo, quedó acreditado, aunque NO fuera siempre, que el departamento había utilizado dicha norma para procesos diferentes y que nadan tenían que ver con la descentralización administrativa, invocando expresamente dicho articulado. Que por tal motivo, resultaba evidente que la interpretación real, incluso del empleador, no al responder la demanda, sino en su actuar, era que dicha preceptiva aplicaba a otros casos, evidenciándose ello en los documentos incorporados, aspecto en el que se tenía que tener presente que la convención era un acuerdo de voluntades

entre dos partes, y la terminología utilizada, desde el punto de vista técnico, jurídico, administrativa no era unánime, pues existía literatura amplia para desentrañar el concepto de descentralización administrativa, por lo que no se esperaba que las partes lo definiesen en el acuerdo. De ahí que cuando esto sucedía, lo procedente era analizar cómo habían obrado realmente, con o sin acta, aspecto que insiste, se encuentra acreditado. En las citas jurisprudenciales reseñadas por el a quo, lo que se decía es que la Corte NO estaba llamada a cuestionar la interpretación de juez de la convención, salvo violación evidente de su texto, empero en la SU-241 de 2005 la Corte Constitucional cuestionó dicha postura de la Sala de Casación Laboral, pues ante una duda mínima en la interpretación, la única opción válida era acoger la tesis más ventajosa, criterio que hoy ha utilizado la Corte Suprema de Justicia.

Es así como reitera que en la práctica otra había sido la interpretación acogida por el departamento de cara a la norma convencional, razón por la cual, debía revocarse la decisión y accederse a todas las pretensiones plasmadas en el libelo genitor.

2.3. ALEGATOS

Únicamente se pronunció el Departamento de Antioquia. Expresamente indicó que:

Sea lo primero manifestar que este apoderado ratifica los argumentos de defensa presentados con la contestación de la demanda, así como con las alegaciones de conclusión expuestos en la respectiva audiencia.

Por otra parte, comparte plenamente este apoderado el fallo de primera instancia, toda vez que no cabe duda alguna de que la convención colectiva suscrita entre el Departamento de Antioquia y Sintrade departamento corresponde a un acuerdo de voluntades y fueron las partes firmantes las que determinaron su sentido y alcance. Su redacción es absolutamente clara y no admite interpretación diferente a la gramaticalmente establecida en el texto, sin que tampoco pueda acudir al principio de favorabilidad para darle un sentido, significado o alcance diferentes. Al respecto, debe recordarse que el contrato es ley para las partes.

Dentro del texto acordado, el artículo 91 dispuso frente a la gestión de reubicación que en el evento en que desaparezca una unidad administrativa de las dependencias del departamento, que tiene en su planta de personal trabajadores oficiales por fusión, transformación o desmembración, a que dé lugar la aplicación de normas sobre descentralización administrativa, el Departamento realizará las gestiones pertinentes para la reubicación de los trabajadores en las mismas condiciones salariales y prestaciones y con la calidad de trabajadores oficiales.

Sin embargo, en el presente asunto la gestión de reubicación no correspondía a una obligación del Departamento de Antioquia por descentralización administrativa. Por el contrario, la entidad territorial realizó en este caso un estudio técnico para la reorganización de la Secretaría de Infraestructura, frente al cual el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió concepto favorable. Es decir, de ninguna manera le fue vulnerado al demandante el derecho convencional contenido en el artículo 91, antes transcrito.

En dichos términos solicita se confirme la sentencia absolutoria frente al reintegro pretendido.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si en virtud de lo normado en el art. 91 de la Convención Colectiva, el demandante debe ser reubicado como trabajador oficial en la planta de cargos del Departamento de Antioquia, analizándose además si dicha cláusula resulta aplicable cuando la supresión del cargo se genera por una casusa diferente a la descentralización administrativa, examinándose si en la práctica esta ha sido la interpretación acogida por el empleador.

4. CONSIDERACIONES.

Sea lo primero citar el contenido del art. 91 de la Convención Colectiva, cuya interpretación cimentó esta acción. Esto dice:

GESTIÓN DE REUBICACIÓN

En el evento en que desaparezca una unidad administrativa de las dependencias del Departamento que tienen en su planta personal trabajadores oficiales, por fusión transformación o desmembración, a que de lugar la aplicación de normas sobre **descentralización administrativa**, el departamento realizará las gestiones pertinentes para la reubicación de los trabajadores en las mismas condiciones salariales y prestacionales y con calidad de trabajadores oficiales. Todo ello, de acuerdo a las disposiciones legales que estén vigentes y la normar que rijan a la entidad que asuma las funciones de las dependencias suprimidas. (Artículo vigésimo de la Convención del 7 de febrero de 1989).

(Resaltos de la Sala)

Centra su defensa el empleador en que la supresión del cargo que desempeñaba el actor como obrero en la Secretaría de Infraestructura, NO fue producto de una descentralización administrativa, y por tanto NO resultaba aplicable la norma ni era procedente su reubicación, precisamente porque ninguna otra dependencia del departamento asumió la gestión que operativamente estaba asignada a dicha secretaría, función que a voces de los testigos, consistía en el construcción, mantenimiento y sostenimiento de las vías terciarias.

Para entender la figura, la entidad demandada acude a la noción que sobre descentralización administrativa contempla el art. 7 de la Ley 489 de 1990¹, pero ciertamente resulta más

¹ ARTICULO 7o. DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el ejercicio de las facultades ~~que se le otorgan~~ por medio de esta ley y en general en el desarrollo y reglamentación de la misma el gobierno será especialmente cuidadoso en el cumplimiento de los principios constitucionales y legales sobre la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. En consecuencia procurará desarrollar disposiciones y normas que profundicen en la distribución de competencias entre los diversos niveles de la administración

comprensible la definición de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-727 de 2000 cuando adujo que era la forma a través de la cual la administración trasfirió competencias a organismos distintos del poder central, que adquirirían autonomía en la gestión de esas funciones².

En todo caso, en mayor o menor complejidad, es un modelo de organización administrativa en la que se transfiere una competencia de una dependencia a otra. Incluso, de alguna manera el recurrente entiende que esta es su genuina acepción, pues lo que pretende a través del recurso de alzada NO es introducir una intelección diferente a ese apartado de la cláusula convencional, sino precisamente que se extienda su aplicación a casos diferentes a la descentralización administrativa, argumentando que así lo ha hecho el departamento en eventos disímiles a la extinción de la secretaría de infraestructura.

Recordemos en este punto, que desde el año 2004 mediante Ordenanza 2104, el Departamento de Antioquia, en uso de las facultades otorgadas por la Asamblea Departamental, tras la realización de un estudio técnico, objeto de reparo por un testigo, y concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública, reorganizó la Secretaría de Infraestructura Física y modificó su estructura, reseñando que como departamento únicamente era un órgano planificador y asesor, no operativo como venía sucediendo.

Por ello a través de la Ordenanza 2105 de 2004 suprimió, entre otros, el cargo de los trabajadores oficiales que fungían como obreros, previo pago de una indemnización, siendo esta precisamente la actividad que ejercía el demandante en dicha secretaría. Consecuencialmente se decidió no prorrogar dichos contratos.

Quiero ello decir que la entidad NO transfirió ninguna función, o creó otro órgano para asumir el mantenimiento y sostenimiento de las vías terciarias, por el contrario, consideró que, según el marco de sus funciones, sólo le correspondía asesorar a los entes municipales en dicha materia.

Así pues, extinguió las funciones que operativamente asumía la Secretaría de Infraestructura Física, y ello incluso es aceptado por quienes fungieron como testigos, señores Juan Manuel

siguiendo en lo posible el criterio de que la prestación de los servicios corresponda a los municipios, el control sobre dicha prestación a los departamentos y la definición de planes, políticas y estrategias a la Nación. Igualmente al interior de las entidades nacionales descentralizadas el gobierno velará porque se establezcan disposiciones de delegación y desconcentración de funciones, de modo tal que sin perjuicio del necesario control administrativo los funcionarios regionales de tales entidades posean y ejerzan efectivas facultades de ejecución presupuestal, ordenación del gasto, contratación y nominación, así como de formulación de los anteproyectos de presupuesto anual de la respectiva entidad para la región sobre la cual ejercen su función.

² La descentralización es una forma de organización administrativa propia de los Estados de forma unitaria, que atenúa la centralización permitiendo la transferencia de competencias a organismos distintos del poder central, que adquieren autonomía en la gestión de las respectivas funciones. No obstante, esta transferencia no implica la ruptura total del vínculo entre el poder central y la entidad descentralizada, sino que, en aras de garantizar el principio de coordinación que gobierna la función administrativa (artículo 209 superior), dicho vínculo permanece vigente a través del llamado control de tutela, existente en nuestra organización administrativa respecto de los entes funcionalmente descentralizados, con definidos perfiles jurídicos, desde la reforma constitucional y administrativa operada en 1968

Monsalve Restrepo, Carlos Alberto Zapata Gallego y Ángel Omar David Higuita, compañeros de trabajo del actor en el departamento en la misma secretaría, excepto el segundo. Algunos continúan vinculados por decisión judicial en el marco de levantamiento del fuero sindical.

Coinciden además sus versiones en señalar que actualmente al interior del departamento, NO existe una dependencia que haya asumido la parte operativa que antes realizaba la Secretaría de Infraestructura Física, incluso el primero de ellos indica que la supresión sí tuvo su génesis en la descentralización administrativa, a través de una entidad llamada INCIDE, pero que un año después la ordenanza que la creó se anuló. También consideran los ponentes que la cláusula convencional sí resultaba aplicable pudiendo reubicarse al actor en la planta central de cargos del departamento que se encarga del mantenimiento del edificio, y que realmente la administración NO acudió a aquella norma, como si lo había hecho ante la extinción de otros cargos, calificados como residuales por el fallador, porque eran más de 200 personas las que se salieron de la entidad por la supresión de la parte operativa de la secretaria mencionada.

Bajo este panorama NO parece que el espíritu de la norma comporte un asunto a esclarecer, óptica bajo la cual NO le compete al operador judicial establecer el alcance del precepto convencional. Ciertamente, como lo refiere el fallador, el texto resulta absolutamente claro pues expresamente circunscribe la viabilidad de la reubicación cuando la unidad desaparece en virtud de una descentralización administrativa, e incluso más adelante expresamente se aduce que las gestiones que le compete realizar al departamento estarán sujetas a las disposiciones legales que rijan a la *entidad que **asuma** las funciones de las dependencias suprimida*, lo que de entrada comporta una limitante y deja entrever que dichas reubicaciones tampoco estarían llamadas a proceder de manera automática, pues sería necesario consultar la reglamentación de esa nueva entidad, lo que por demás implica que sería en aquella y no en otra, en la que procedería la reubicación..

Quiere esto decir, sin asomo de duda, que para que el trabajador resulte favorecido con dicha cláusula, por lo menos otra dependencia debe asumir las funciones suprimidas, de ahí que las partes firmantes de la convención previamente hubiesen circunscrito la reubicación a los eventos en que se presentase una descentralización administrativa, buscando con ello impedir que el empleador, bajo el ropaje de la supresión de un cargo, asumido por otra dependencia incluso con un rótulo diferente, despidiese al trabajador.

NO fue ello lo que ocurrió en este caso, NO puede entonces hacerse extensivo dicha prerrogativa al aquí demandante.

Ahora, el hecho de que, en casos aislados, a *mutuo proprio*, el departamento hubiese decidido reubicar a ciertos trabajadores en otras dependencias, NO implica que indefectiblemente ello genere un derecho a favor del actor, ni aun con apego a los postulados que rigen el principio de igualdad, pues se tratan de asuntos fácticos diferentes. *Verbi gratia*, en el año 2012 y 2013, conforme se aprecia en los actos administrativos obrantes a folio 198 a 200, diez operarios que se desempeñaban en la Secretaría de Agricultura, fueron trasladados al área de servicios generales de la Secretaría General, pero porque esta última tenía una necesidad de incrementar su planta con el fin de reforzar las labores de mantenimiento y adecuación del Centro Administrativo Departamental, la Imprenta Departamental y la FLA. Por lo menos frente a seis de ellos, se desconocen si sus funciones fueron suprimidas o el cargo extinguido, aspecto que inicialmente le impediría al demandante efectuar algún tipo de comparación con la finalidad de contrastar las circunstancias; frente a los restantes cuatro se indica que ello obedeció a la terminación de unos convenios interadministrativos con algunos municipios y con la Feria de Ganado, procediendo a su reubicación, soportando su determinación en el artículo 91 de la Recopilación de Normas Convencionales y Laudos arbitrales vigentes.

Empero, se insiste, continúan desconociéndose los pormenores de ambos eventos como para siquiera considerar la opción de realizar un comparativo, menos aún si se tratan de disímiles secretarías, pero en todo caso, cabría preguntarnos si tal proceder del demandado, en dos oportunidades, tiene la vocación o implica la modificación de la norma convencional, o simplemente materializa la voluntad de una administración de NO afectar a unos cuantos trabajadores, cuando puede ubicarlos en otros sitios, situación que evidentemente NO se acoplaba a lo sucedido con las casi 300 personas que conformaban la planta de cargos de la secretaría de infraestructura modificada, por lo menos en su parte operativa, en la que se tuvieron en cuenta, entre otros criterios, el económico para proceder con su extinción.

En este orden de ideas, la pretensión del actor carece de fundamento normativo.

Aunado a lo anterior, en caso de contornos similares, donde se invocaba la aplicación de la misma cláusula convencional, la Sala de Casación Laboral, mediante sentencia SL2517-2019, sostuvo que:

Finalmente, frente a la estabilidad laboral convencional, ya la corte tuvo oportunidad de pronunciarse en un asunto de contornos similares, en sentencia SL3075-2018, así:

[...]

Señala el precepto extralegal al que se refirió el Colegiado:

ARTICULO VIGESIMO.- GESTIONES DE REUBICACION: En el evento en que desaparezca una unidad administrativa de las dependencias del Departamento que tienen en su planta de personal trabajadores oficiales, por fusión, transformación o desmembración, a que dé lugar la aplicación de normas sobre descentralización administrativa, el Departamento realizará las gestiones pertinentes para la reubicación de los trabajadores en las mismas condiciones salariales y prestacionales y con calidad de trabajadores oficiales. Todo ello, de acuerdo a las disposiciones legales que estén vigentes y las normas que rijan a la entidad que asuma las funciones de las dependencias suprimidas (f.º 52 cuaderno principal).

*De la lectura desprevenida del mismo, no luce errónea la interpretación que da el Tribunal de ella y, por el contrario la misma se exhibe razonable, en tanto la mencionada disposición no consagra una orden imperativa de reubicación de los trabajadores ante la liquidación de la entidad, pues si bien es cierto, dispuso que el Departamento “realizará las gestiones pertinentes para la reubicación de los trabajadores en las mismas condiciones salariales y prestacionales y con calidad de trabajadores oficiales” también lo es, que a renglón seguido estableció que tales gestiones deben ajustarse a “las normas que rijan a la entidad que asuma las funciones de las dependencias suprimidas”, lo que no supone un traslado, reintegro o reubicación automática de todos los servidores de la antigua empresa a la nueva, sino que sujetó esa eventualidad a las normas y organización de esta última, lo que no lleva aparejada la estabilidad que alega la censura.
[...]*

Dado que, el asunto que se examina es de similares características fácticas y jurídicas, para la Sala la conclusión ha de ser la misma, es decir, que el cargo no prospera porque el Tribunal no incurrió en los errores enrostrados por el censor.

Y en la sentencia SL1912-2022, al analizar un caso con el mismo fundamento, donde la parte resistente también era el Departamento de Antioquia, la Corte Suprema de Justicia concluyó que NO era posible acceder a la reubicación convencional pretendida, en la medida que de conformidad con los medios de convicción arrimados al expediente, la demandada había realizado estudios especializados previos que avalaban y aconsejaban la reorganización administrativa, tal y como ocurre en este caso. Estas fueron sus palabras:

Puntualmente se concertó que ante la desaparición de una unidad administrativa, bien fuera por fusión, transformación o desmembración, el Departamento de Antioquia debía realizar las gestiones correspondientes para reubicar a los asalariados en las mismas condiciones que se encontraban.

La estabilidad convencional es clara en garantizar permanencia en el cargo que desempeñara un trabajador oficial vinculado a la entidad territorial llamada a juicio.

Ahora bien, esta Corporación ha optado por la imposibilidad jurídica de la reincorporación, pues las entidades estatales pueden suprimir o eliminar cargos según las necesidades del servicio, actos que corresponden a una potestad legítima para reorganizarse y estructurar sus plantas de personal, dado que los intereses particulares deben ceder ante los generales. En sentencia CSJ SL8939-2015, reiterada en la CSJ SL14019-2016, se discurrió:

En torno a dicha temática, contrario a lo que arguye la censura, esta Sala de la Corte ha adocinado que las cláusulas que disponen el reintegro de trabajadores, bien que provengan de disposiciones legales, acuerdos convencionales o garantías como el fuero circunstancial, en tanto intereses particulares, deben ceder ante intereses generales como los que se traducen en las facultades del Estado de reorganizar, suprimir y liquidar sus entidades

administrativas, y, como consecuencia, eliminar cargos. Ante dicho panorama, se ha precisado, las medidas de reintegro se tornan de imposible cumplimiento. (Ver CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 33888, CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39325, entre muchas otras).

Esa misma doctrina ha sido morigerada para los casos en los que las reestructuraciones administrativas provienen de las mismas entidades, se limitan a la supresión de cargos y no encuentran respaldo en el resguardo de bienes de interés superior. En tal caso, ha dicho la Corte, no puede concluirse automáticamente que el reintegro es de imposible acatamiento, sino que es necesario verificar que la reorganización y supresión de cargos estuvo precedida de estudios especializados que aconsejen el reordenamiento administrativo, de manera que se acredite el cumplimiento y realización de intereses superiores, que prevalezcan sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. En la sentencia CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 33004, reiterada, entre otras, en la CSJ SL576-2013 y CSJ SL16218-2014.

[...]

Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que corresponde a la orientación del cargo, el Tribunal no desconoció la referida doctrina, pues advirtió que en casos como en el presente surgía una «...tensión entre el derecho al reintegro del servidor público con resguardo foral cuando es despedido por supresión del cargo en una entidad oficial, y la autonomía administrativa para proveerse su propia organización que la Constitución confiere a este tipo de entidades.»

Y tampoco puede decirse que el Tribunal hubiera concluido automáticamente la imposibilidad del reintegro, para acusarlo de un error hermenéutico, pues, en primer lugar, tuvo en cuenta que no solo se había suprimido el empleo que tenía el actor sino toda la dependencia en la que laboraba, además de que citó varios documentos como la Ordenanza No. 15 del 27 de octubre de 2004, a través de la cual se facultó al Gobernador de Antioquia para modificar la estructura de la administración departamental «...única y exclusivamente referida a la Secretaría de Infraestructura...»; el Decreto 2104 del 28 de octubre de 2004, que dispuso la supresión de, entre otras, la Dirección de Conservación de Vías de la Dirección Técnica, a la cual estaba adscrito el demandante; el Decreto 2105 del 28 de octubre de 2004, por medio del cual se suprimieron, entre otros, los cargos de Almacenista; el Decreto 2109 del 28 de octubre de 2004, que estableció la no prórroga de los contratos de trabajo de los trabajadores de esa dependencia, dentro de los que se encontraba el actor; el Decreto 1891 de la misma fecha, que definió la suspensión de las actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas de la Secretaría de Infraestructura Física, a partir de un estudio técnico en el que se destacaban las dificultades y costos del ejercicio de dicha labor, directamente por el Departamento.

[...]

A partir de lo anterior, como conclusión, expuso que «...existe en la actualidad una imposibilidad jurídica y material para ordenar el reintegro del demandante al cargo que venía ocupando en la secretaría en cuestión, o incluso a otro cargo equivalente, por la supresión de que fueron objeto tanto el empleo mismo como la dependencia a la cual pertenecía. En su lugar procedía, como en efecto lo reconoció el Departamento, la indemnización sustitutiva del reintegro que fue efectivamente cancelada en cuantía de \$35.532.033., según se infiere de las liquidaciones de folios 173/174.

Al acompasar la doctrina de esta Corporación, con lo acordado extralegalmente, independientemente de que la no prórroga del contrato de trabajo tuviera o no origen en una descentralización administrativa, y que la norma convencional refiriera el término de «reubicación», con los estudios técnicos que la entidad realizó, es evidente que estaba facultada para reorganizarse administrativamente, así dan cuenta los documentos de folios 99 a 109, 127 a 132 vto, 133 a 136, 147 a 152, 159 a 163 vto.

En efecto, en el Decreto 1891 de 2005 (fs.º159 a 163 vto), se hizo constar que el Departamento de Antioquia realizó *«con el acompañamiento del Departamento Administrativo de Función Pública, un estudio técnico tendiente a determinar la viabilidad de la Secretaría de Infraestructura Física»*. Se reproducen las conclusiones de dicho estudio y las recomendaciones.

En síntesis, en el estudio se concluyó que la razón por la cual se suspendían los contratos de los trabajadores oficiales adscrito a la Secretaría en comento, tenía razón de ser en los altos costos de mantenimiento de la red vial departamental, el alto grado de *«obsolescencia de la maquinaria y equipo destinado a la conservación y apertura de los carretables y toma de decisiones, falta de oportunidad y calidad en los resultados que satisfagan las necesidades de la comunicas»*. Resaltó el trabajo deficiente que impedía gestionar de manera ágil y eficiente el recurso humano, y que no había capacidad de respuesta. Destacó el *«modelo burocrático»*, que chocaba con los deberes y metas del Plan de Desarrollo y que la conservación de vías no debía ejecutarse directamente por el ente accionado, pues *«la forma como hoy se ejecuta es mucho más onerosa»*. Indicó las cifras con las cuales se arribó a esa conclusión.

Sin que sea necesario ahondar en más reseñas acerca de otros documentos que ratifican la realización de los estudios técnicos, la Sala estima que, si bien el ejercicio de la autonomía administrativa de la que gozan las entidades descentralizadas territoriales no garantiza que sus actuaciones estén revestidas de la excepcionalidad y racionalidad, que se exige para que primen los intereses públicos sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, en este caso, la supresión de cargos de la planta de personal tuvo origen en estudios que aconsejaron el reordenamiento administrativo.

En los términos expuestos se CONFIRMARÁ la decisión objeto del recurso de alzada, por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han proferido en torno al tema, toda vez que la preceptiva convencional invocada como fundamento de la pretensión encaminada a obtener la reubicación del demandante, NI resulta aplicable al caso, y aunque lo fuera, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, se configuraría una *imposibilidad jurídica de la reincorporación*, pues la entidad estatal contaba con la facultad de suprimir o eliminar cargos según las necesidades del servicio.

Se condenará en costas en esta instancia a la parte actora por no haber tenido éxito en el recurso, fijándose como agencias en derecho la suma de \$100.000.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**


PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 26 de junio de 2018 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **JOSÉ NORVEY RAMÍREZ HERRERA** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 15.483.598,

contra el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como agencias en derecho la suma de \$100.000.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación sentencia
Demandante:	JOSE NORVEY RAMÍREZ HERRERA
Demandado:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Radicado No.:	05001-31-05- 004-2016-00389-01
Tema:	reintegro – interpretación cláusula convencional
Decisión:	CONFIRMA ABSOLUCIÓN
Fecha de la sentencia:	23/05/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 24/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario